

Apuntes de terreno: los campamentos de Cerro Navia*

Francisca Márquez B.

SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación

fmarquez@academia.cl

Santiago de Chile, noviembre 2002

1. POBREZA Y ESTIGMA

LA HISTORIA DE LOS QUE SOBREVIVEN

En el campamento El Resbalón, nadie sabe a ciencia cierta cuándo comenzaron a llegar las primeras familias. Algunos dicen que al menos hace unos 35 años; otros, que allí, a la orilla del río Mapocho, siempre han existido campamentos. Y es que en su memoria no hay grandes hitos que recordar. Relatos circulares, marcados apenas por las estaciones del año: El verano con sus culebras, garrapatas, zancudos y polvo; en invierno, las inundaciones, las goteras, el barro, los resfríos. Y las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, el Día del Niño, el 18 de septiembre, recuerdan y marcan el ritmo del año. Lo demás es gestión, hábil y empeñosa gestión de la ayuda que nunca ha dejado de llegar: el Municipio, el Hogar de Cristo, Fosis, Chile Barrio, Sence, algún político, la Iglesia católica, evangélica o mormona... todos pasan por allí, porque “la gente nos mira diferentes; es que somos muy pobres, pero los otros tampoco tienen mucho; más que nosotros sí, pero cualquiera tiene más que nosotros”.

El trabajo de estos años y la serie de relatos de vida recopilados a lo largo de ellos, nos muestran que la pobreza, más que una condición, es una experiencia que se vive y se enfrenta de muchas formas. Nos muestran también que la pobreza no se construye ni reproduce en los estrechos límites de los iguales; ella se construye siempre en la relación con otros; es una experiencia que remite a una condición de desigualdad; por tanto, no puede sino ser humillante y descalificadora. (sin cursiva)

LA HISTORIA DE LOS QUE NO PARECEN LO QUE SON

Veinte años tiene el campamento Los Conquistadores. En sus inicios era un basural; hoy, un espacio habitable: luz, agua, alcantarillado autoconstruido, casas pintadas, teléfonos, pasaje con ripio, reja a la entrada, normas de seguridad, limpieza. El principal orgullo de sus habitantes: “no parecer lo que son”. Estudio, trabajo, ahorro para la vivienda y empeño para ser reconocidos por el vecindario como “pobladores”. Aunque en Los Conquistadores saben que poco o nada han conquistado: “basural” para los vecinos; “cueva de ladrones” para los carabineros; y el terror de salir asignados con viviendas

* Este texto se basa en el programa de trabajo desarrollado por SUR entre los años 1997 y 2002 en la comuna de Cerro Navia, Santiago de Chile, con el apoyo de FOS-Bélgica y Misereor-Alemania.

sociales en condominio con otros pobres, son la más clara evidencia de que a pesar del empeño por “no parecer”, ellos finalmente “son”.

Ser pobre en este país, en Chile, es ser portador de un estigma. En su sentido etimológico, estigma es una marca en el cuerpo que se imponía con hierro candente como pena infamante o como signo de esclavitud. Y como pena que es, ella se vive y sufre de manera silenciosa y vergonzante. La pobreza de los noventa, lejos de ser motivo de rebeldía y movilización, es una pobreza puertas adentro. Y esta constatación no es menor cuando queremos hablar de desarrollo, de políticas sociales, de programas de superación o erradicación de la pobreza, de metodologías e instrumentos.

LA HISTORIA DE LOS MÁS MAL MIRADOS

El Arenal es un campamento que, según el recuerdo de sus habitantes, tiene más de veinte años. La gente fue llegando, con sus familias y sus conocidos. En sus inicios no había luz ni agua. Las gestiones no tardaron: El agua, con un vecino buena persona; la luz, con un trabajador de Chilectra colgado de un poste; la presencia de la tele, los llamados a la alcaldía, las mujeres adelante, los hombres en la retaguardia, para no ir presos. Veredas, rejas, ahorro para la vivienda, limpieza y organización corrían por cuenta de los mismos pobladores. Hasta que los límites de la autogestión se hicieron evidentes en la solución de la cesantía y la obtención de la vivienda. Entonces vino el repliegue y el resguardo. Pobres, pero dignos: estudio, limpieza, respeto, familia, deporte, trabajo... Aun así, en El Arenal saben que “la decencia” no basta; que mientras vivan donde viven, tendrán que “dar la dirección pa’ calladito, porque el chileno es muy mirador en menos”; porque irremediablemente siempre serán “los más mal mirados”.

En Chile, la experiencia de los más pobres muestra que la convivencia con la desigualdad ha pasado a ser parte del acuerdo social del país, un dato más de la realidad social. La dominación simbólica de la pobreza se expresa en cada una de las vivencias y acciones de los que la sufren. La percepción de ser permanentemente estigmatizados y reprobados por ser aquello que son (*ser de campamentos*), y a la vez la negación de salidas para dejar de serlo, es una constante en las vidas de los pobladores. Así lo muestran los relatos de El Arenal y Los Conquistadores. Éstas son historias donde la contradicción y tensión cotidiana con el entorno no tarda en tener consecuencias identitarias y sociales; la descalificación social penetra la imagen de sí mismo, transforma y moldea la capacidad de acción, pero por sobre todo destruye desde adentro y de manera casi imperceptible la rebeldía frente al otro. El repliegue en la comunidad de iguales es hoy la única respuesta que esta sociedad está dispuesta a tolerar. Una sociedad segregada y temerosa, afanada en resguardarse y cobijarse en los estrechos límites de la comunidad de iguales, ha reemplazado las ya viejas movilizaciones sociales por una vida y una sociedad más digna y justa.

En El Arenal, de la autogestión eficiente y concertada con el entorno municipal, se pasar al repliegue en sí mismos, al resguardo en los estrechos pero seguros márgenes de la comunidad. En Los Conquistadores, de la búsqueda de alianzas con el vecindario y el entorno institucional, al desarraigo de la comunidad de iguales y el repliegue en el hogar. **En El Resbalón, en cambio, hábiles en descifrar la mirada, la propuesta y la ayuda del otro, nada se deja pasar; la pobreza se reproduce al son de la caridad, de los programas sociales que permanentemente están llegando.** (creo que en la historia lo digo también, no me parece que haya que repetirlo mas claramente)

Las familias de estos campamentos dejan en claro que reconocerse en la mirada del otro (existir para el otro) son necesidades primordiales para hacerse un lugar en el seno de una sociedad; para existir, para participar y para el logro de cuotas mínimas de ciudadanía.

Falto de interlocutor y de lazos sociales distintos a los que se tienen con los iguales, más solo, desprotegido y silencioso que nunca, el pobre de los noventa sabe que la distancia no deja de acrecentarse: entre aquello que se desea y aquello que se es, entre lo que se sabe y lo que se puede, entre lo imaginado y lo posible. El pobre de los noventa es, por sobre todo, un extranjero; extranjero — ajeno— a sí mismo y a la sociedad. En los relatos de la pobreza no existen puntos de encuentro entre la mirada de sí y la mirada del otro. Desde el momento en que la pobreza es sólo carencia, combatida y juzgada intolerable, ella no puede sino ser desvalorizante y estigmatizante para quien la porta. La *desclasificación* social que introduce la pobreza la aproxima a una noción de no-ciudadanía: pobre es aquel que está fuera del mercado y de la sociedad; que, por tanto, sólo puede ser sujeto de compasión y asistencia social. Sea que se trate de campesinos, obreros, pescadores, niños, la pobreza no logra constituirse ni en categoría social; el pobre es, por definición, quien nada tiene. Sin lazos sociales básicos, el pobre no puede sino vivir como un *extranjero* al resto de la sociedad, en el aislamiento, el apartheid y el gueto. El disimulo de su inferioridad estigmatizante, el miedo a los otros y el vacío de sentidos desde donde levantar una comunidad de sentidos, está en la base de la inmovilización de su accionar y la pérdida de actoría social.

La humillación, como aquella que viven los dirigentes de Los Conquistadores o de El Arenal, es siempre pública, porque la vergüenza se produce por la mirada del otro, que introduce la descalificación social a la condición de ciudadanía. Es una mirada que se reactualiza cada vez que el sujeto es confrontado a una situación de rechazo y estigmatización. **A no ser que, tal como lo hace El Resbalón, aprendan a valerse (¿y apropiarse?) de la mirada, de la compasión, de la caridad y la culpa del otro para poder sobrevivir.** El costo no es menor.

2. POBREZAS Y ESTADO

En el diagnóstico de los sectores de extrema pobreza se confunden dos situaciones que, en términos de estrategia de política social, se requiere diferenciar:

- Los que quedan fuera de la red estatal, indigentes que no acceden a ella, que no se acercan o que fueron expulsados por la red de seguridad social.
- Los que permanecen en la red estatal, en una suerte de clientelismo; que nunca “egresan” de la red, y mantienen índices de indigencia a lo largo de sus vidas y trayectorias de permanentes asistidos.

LOS QUE NO “ACCEDEN” A LA RED ESTATAL

En este grupo están los que nunca han accedido, los más miserables, para quienes “demandar” beneficios, ejercer sus derechos o moverse en la red estatal es asunto de “otros”, nunca de ellos. Ésta es la pobreza dura. En primer lugar, porque la definición de crisis no está en ellos, menos aún la noción de “proyecto vital”. Son vidas que históricamente, generación tras generación, se han movido en la miseria; por tanto, no hay punto de referencia distinto entre los suyos.

Un aspecto central de política, cualquiera ésta sea, dirigida a estos grupos, requiere —antes que nada— diversificar la variedad de códigos con que las familias o personas que los integran leen su propia experiencia. La variedad de códigos culturales está en la base, por ejemplo, de por qué una familia puede decidir en un determinado momento posponer la compra de un televisor en función de asegurar la educación de los hijos. Esta apuesta supone que las familias hayan podido previamente ver, conocer experiencias similares, y que éstas se levanten como referentes valorados para ellos, hasta el punto de hacerlos propios.

Emancipar, autonomizar y enriquecer la experiencia social de los sectores más duros de la pobreza, requiere, así, una estrategia de diversificación y ampliación de las redes sociales, comunitarias, barriales, estatales, que permita comparar las propias vidas con otras. La integración social se construye en relación siempre a otros. La estrategia de intervención caso a caso, individual, sólo puede llevar a construir un lazo de dependencia con el Estado. La diversificación de sus propios códigos culturales abrirá en las familias de la pobreza dura nuevas orientaciones para la acción, con lo que la red estatal pasa a ser simplemente una red más entre todas las posibles. El rol del Estado, en estos casos, es promover esa integración a través de intervenciones orientadas a facilitar la construcción de redes sociales, primero barriales, vecinales, para luego ir pasando a instancias más amplias, como pueden ser, por ejemplo, las mesas de trabajo que reúnen a distintos actores en torno a un problema o un objetivo. En este caso, se requiere sin duda una acción proactiva por parte del Estado, pues las familias de estos sectores por definición no acceden a él.

LOS QUE NO “EGRESAN” DE LA RED ESTATAL

Si se analizan las fichas CAS¹ de un municipio cualquiera, se observa que hay un número no menor de familias que nunca “egresan” de la red estatal. Es decir, para ellas el acceso a subsidios sociales se ha convertido en un “ingreso” constante, permanente del presupuesto familiar. ¿Qué significa esto exactamente?

Lo primero es que, efectivamente, la red nunca ha sido diseñada pensando en un “egreso” de sus beneficiarios. Si ellos egresan no es necesariamente *gracias* a la red, sino a menudo a pesar de ella. Es decir, ocurre o porque mejoraron los indicadores socioeconómicos de las familias gracias a la incorporación de algún miembro al mercado, o porque la familia se desistió y retiró de la red. La pregunta que habría que plantearse, entonces, es cómo hacer para que esta red se transforme en un factor de “impulso” hacia la movilidad y el egreso, y no en un bolsón sin fondo ni salida. Sabido es que quienes son encuestados a menudo tienden a “mentir” para poder permanecer en la red —negando mínimos ingresos o bienes—, en una suerte de clientelismo sin salida.

Quienes egresan de la red parecen hacerlo por dos razones:

- El mejoramiento de las condiciones de trabajo de los miembros del hogar, o el ingreso al mercado de uno de ellos. Éste es el principal factor de egreso de la red estatal en el caso de los más pobres.
- El endurecimiento de sus condiciones, migraciones, y marginalidad extrema.

Pero si es así, si el trabajo —el ingreso al mercado de trabajo— está en la base de que algunos egresen de la red estatal y otros no, la pregunta pareciera ser si esa red debiera orientarse hacia la incorporación de sus beneficiarios al mercado. La articulación entre Estado y mercado en las políticas sociales, si bien es su eslabón más débil, es también el más virtuoso en términos de su impacto para la superación de la pobreza. Ello supondría, sin embargo, dejar de castigar a quien encuentra un trabajo o quien logra obtener una vivienda; que no por mejorar los indicadores de ingresos de la familia, la expulsión de la red sea inmediata. Por el contrario, es sabido que el ingreso de un miembro al mundo laboral puede acarrear al hogar una serie de gastos (transporte, vestimenta, cuidado de niños, aseo personal, trámites de

¹ La Ficha CAS tiene su origen en los Comités de Asistencia Social Comunal (CAS) —de ahí su sigla—, que se constituyeron en la década de los setenta, durante el gobierno militar. Esta Ficha es un instrumento estandarizado y único para la priorización y focalización de los programas de asistencia social en los sectores más necesitados del país.
<http://www.mideplan.cl/sitio/Sitio/cas/htm/cas.htm>

papeles, alimentación, entre tantos otros). Expulsarlo de la red es transferir al trabajo los soportes para esas necesidades, en circunstancias en que a menudo los sueldos son mínimos e inestables.

Por el contrario, la red debiera “sostener” el ingreso a menudo precario de las familias, en la perspectiva de ir rompiendo progresivamente (y no de manera abrupta) el lazo con la red. De esa forma se puede ir facilitando (premiando) la integración a un mundo que, además de aportar nuevos ingresos al hogar, enriquecerá lo que hemos denominado *la experiencia social de los más pobres*. El ingreso al trabajo, por muy precario que éste sea, constituye una fuente de socialización, educación e integración social fundamental entre quienes no han podido, y probablemente no podrán, terminar su enseñanza básica; y que, además, han vivido la mayor parte de sus vidas en situación de pobreza extrema.

Lo cierto es que, en Chile, el debilitamiento del rol integrador de las políticas sociales y la desigualdad creciente plantean serias dudas en cuanto a la posibilidad de la sociedad para sostener la integración de los sectores más pobres. La integración social depende finalmente de los recursos propios con que cada uno cuenta. La probabilidad de reproducir las desigualdades intergeneracionalmente son hoy altas.

Con un mercado laboral altamente precarizado, nada asegura que una vez retirados los beneficios estatales, estén dadas las condiciones para el éxito y sustentabilidad de los procesos iniciados. El acceso al mercado de trabajo es clave en el inicio de procesos de movilidad social. Existe, en efecto, una correlación fuerte entre el lugar ocupado en el trabajo y la participación en redes de sociabilidad y sistemas de protección que “cubren” a un individuo y su familia frente a los riesgos de la vida. Gatillar procesos de movilidad social entre los más pobres requiere necesariamente ubicar el problema de las condiciones de trabajo en el centro de la preocupación pública. De manera más radical, significa reponer el trabajo como actividad sobre la cual se reflexiona, se debate y se interviene con el objeto de asegurar un espacio para todos. Pero también significa resituar en el debate público la pregunta por las nuevas formas de integración y cohesión social que nuestra sociedad demanda.

3. LECCIONES DE POLÍTICA

La década de los noventa en Chile deja entrever que la concepción de políticas sociales se encuentra en un estado de profundo desconcierto y/o ambigüedad. La ausencia de posiciones políticas claras dificulta visualizar las tendencias predominantes en la discusión sobre los principios que hoy fundan el contrato social en Chile, y la definición de los objetivos de quienes diseñan y aplican las políticas sociales.²

La idea de que una racionalidad técnica tiende a predominar en las decisiones públicas, y que finalmente lo que interesa a las políticas sociales es llevar adelante valores universales compartidos por todos en las diversas áreas de la vida ciudadana (Oneto 2002), tiende a hacer más ambigua la discusión. En este sentido, más que un *paradigma de las políticas sociales* hoy en Chile, lo que se observa es una imbricación de paradigmas donde la mirada liberal/neoliberal se entremezcla a menudo de manera contradictoria a otras de corte socialista y demócratas.

Lo cierto, sin embargo, es que en términos de los paradigmas de las políticas sociales, la década de los noventa vio complejizarse la percepción de igualdad como principio del contrato social del Estado de Compromiso. A la idea de “reducción de las desigualdades” (por lo general comprendida como la reducción de las disparidades de ingresos), se agregan las nociones de *equidad y oportunidades*. El principio de “igualdad de oportunidades” levantado por el gobierno de la Concertación durante los años noventa, más que poner el énfasis en la igualdad del punto de partida, lo que propone es el acceso a recursos para el desarrollo de capacidades y habilidades que faciliten la movilidad en el tiempo, incluso

² Usando dos distinciones claves de G. Bajoit (2002).

intergeneracionalmente. Se trata de oportunidades que el Estado asegurará, pero será responsabilidad de los individuos aprovecharlas en su propio beneficio. Es, así, un principio que asume que los resultados podrán ser diferentes y no siempre igualitarios.

En términos generales, podemos señalar que el cuestionamiento del sistema de desarrollo o de las dinámicas sociales que favorecen la reproducción de la pobreza y la desigualdad, está ausente en el debate público. El debate de las políticas sociales de los noventa no se centra en la superación de la desigualdad social, sino en el desafío de la superación de la línea de la pobreza, aun cuando ello implique la adaptación e integración pasiva y silenciosa de los más pobres al sistema (Bajoit 2002). Las políticas sociales de los noventa dejan fuera, por ende, los grandes temas y preguntas vinculados al estilo de desarrollo social, a los principios articuladores de la integración social y a la desigualdad.

El reciente diseño de política para los más pobres refuerza esta visión, a través de una estrategia estatal que reactualiza viejas prácticas de la asistencia social de los ochenta.

El discurso sobre los *objetivos de las políticas sociales* de los años noventa no titubea en oponer a la normalización y disciplinamiento de los ochenta, el objetivo de la participación social de los más pobres como expresión y fortalecimiento de ciudadanía social. La asistencia social de los ochenta pierde terreno en el conjunto de las políticas sociales, y gana fuerza el componente de inversión social levantado como instrumento de integración social y ciudadanía. La “focalización” de estos programas en la población y en los territorios más pobres y vulnerables, se espera que asegure una mayor eficacia en el cumplimiento de estos objetivos.

En síntesis, las políticas sociales de los últimos diez años en Chile se caracterizan por los siguientes aspectos:

a) *Un modelo intocable*: Las políticas sociales han contribuido escasamente a suavizar el impacto negativo del modelo económico sobre los más pobres. Lo que se observa, más bien, es que una larga brecha sigue separando a los pobres de quienes obtienen los beneficios del actual modelo de desarrollo. El peso de la privatización de los servicios públicos y la desregulación y precarización progresiva del mercado de trabajo tienden a dejar en una situación de fuerte vulnerabilidad a un sector no menor de la población.

El debilitamiento del rol integrador de las políticas sociales y la creciente desigualdad en Chile, plantean serias dudas respecto de la posibilidad de la sociedad para sostener su integración. La integración social depende finalmente de los recursos con que cada uno cuenta (Espinoza 1999). Las probabilidades de reproducir las desigualdades intergeneracionalmente son, por ende, altas.

Con un mercado laboral altamente precarizado, nada asegura que, una vez retirados los beneficios estatales, las condiciones para el éxito y sustentabilidad de los procesos iniciados estén dadas. Decíamos que el acceso al mercado de trabajo es clave en el inicio de procesos de movilidad social. Existe, en efecto, una correlación fuerte entre el lugar ocupado en el trabajo y la participación en redes de sociabilidad y sistemas de protección que “cubren” a un individuo y su familia frente a los riesgos de la vida. Gatillar procesos de movilidad social entre los más pobres requiere necesariamente ubicar el problema de las condiciones de trabajo en el centro de la preocupación pública. De manera más radical, significa reponer el trabajo como actividad sobre la cual se reflexiona, se debate y se interviene con objeto de asegurar un espacio para todas las personas.

b) La cristalización de la desigualdad: La universalidad era uno de los dogmas fundadores del Estado providencia moderno, una manera de eliminar simbólicamente las diferencias de clases en una parte del espacio social. Ello era, por tanto, coherente con la comprensión de las prestaciones sociales como derechos (Rosanvallón 1999).

El principio de la focalización de las políticas sociales rompe, en cierto modo, con este principio de universalidad, junto con resolver su crisis financiera, el Estado asegura la llegada de los recursos a quienes realmente los necesitan, evitando así filtraciones a grupos que no los requieren.

Pero la focalización, por definición, divide a la sociedad en dos bloques: los integrados y los excluidos. Para estos últimos, las oportunidades de romper con los mecanismos de reproducción de la pobreza están sin duda más allá de su alcance. Tal como lo han mostrado adecuadamente los estudios sobre redes sociales y pobreza, los estrechos círculos sociales en los que se desenvuelven los más pobres ofrecen una escasa variedad de recursos a los que poder echar mano. Si algo caracteriza fuertemente a la cultura de la pobreza es su invisibilidad social, así como la escasa diversidad de sus vínculos de referencia y pertenencia desde donde imaginar, construir y sostener proyectos de movilidad social.

En los años noventa, la focalización del gasto social demostró serias dificultades para ampliar este capital de vínculos y relaciones sociales. Por el contrario, lo que se observa es una tendencia de las políticas y programas sociales a simplemente favorecer los lazos entre iguales, y reforzar la tendencia a la segregación social propia de estos territorios de pobreza.

La referencia cada vez más frecuente a la noción de *contrato* en la práctica del trabajo social corresponde, de manera aún balbuceante y experimental, a la apertura a una relación de reciprocidad, una responsabilización del beneficiario considerado como actor de su propio devenir. El sujeto de la acción social es considerado como una persona autónoma responsable, capaz de asumir compromisos y respetarlos.

El riesgo, sin embargo, de poner el acento sobre el principio de autonomía está en la definición del ejercicio de la solidaridad, pero también de la consideración de las fuerzas estructurales en el ejercicio de esta autonomía. Si mendigar es un derecho, eso significa que en cierta forma la inserción ya no es un deber para la sociedad. La autonomía radical puede convertirse, en ese caso, en la eliminación del contrato social (Rosanvallón 1999). Una visión puramente individualista de lo social conduce, por cierto, a un callejón sin salida. El respeto esencial por el individuo no puede sino ir a la par con la reconstrucción del vínculo social. No hay contrato social posible tampoco sin una inserción de calidad en el mercado de trabajo.

Superar la pobreza e iniciar procesos de movilidad social exige el desarrollo de valores de integración social; de otra manera, las políticas sociales irremediablemente contribuirán al refuerzo de la estigmatización y la desigualdad social.

c) La participación proyectada: La participación constituye uno de los ejes orientadores de las políticas sociales de los noventa. Ella permite articular el principio de subsidiaridad al de ciudadanía. La invitación que el Estado hace a los ciudadanos para "participar" en el diseño y ejecución de los programas sociales, constituye uno de los aspectos más "innovadores" de la década.

Una compleja ingeniería social permitió dar forma a cientos de proyectos autogestionados localmente, vinculando estrechamente el principio de la focalización al de la participación. De este modo, los recursos fueron condicionados a la capacidad de formular proyectos que tenían las comunidades y sus dirigentes, los que progresivamente se transformaron en hábiles especialistas. La superposición de la

lógica estatal del “proyectismo” a la lógica social de las comunidades y sus familias, rara vez ha sido puesta en cuestión.

El olvido de la estructura social de los más pobres, así como de sus lógicas y temporalidades, permite comprender por qué más que fortalecer los procesos de construcción de identidades colectivas y expresión de ciudadanía, o el efectivo mejoramiento a los ingresos, a menudo estos proyectos dividieron a las comunidades o, en el mejor de los casos, se esfumaron apenas terminado el subsidio estatal. La participación reducida a un ejercicio acotado en el tiempo y el espacio, difícilmente puede ser una ventana al inicio de procesos de transformación social.

Como bien señala V. Espinoza (1999), “los pobres de los noventa pueden definirse como proyectizados, por contraste con los pobres subsidiados de los ochenta, los pobres atomizados de los setenta y los pobres organizados de los sesenta”.

d) Integración y cohesión social: Las políticas asistenciales de entrega de recursos materiales y monetarios coexistieron durante toda la década de los noventa con aquellas de inversión social y participación. Como acertadamente señalaba Simmel, a inicios del siglo XX, si algo caracteriza a estas políticas, es su principio de “contención” de la explosión social a través de la entrega de recursos puntuales a los más pobres.

Estas prestaciones de corte asistencial, sin embargo, contienen igualmente una dimensión de ciudadanía. Ellas constituyen una de las expresiones “pasivas” del vínculo social y, a su manera, dan testimonio de una forma de igualdad. Esta dimensión simbólica es esencial y participa del principio mismo de la solidaridad. Pero para que ello ocurra es imprescindible la existencia de una asistencia no degradante, que asuma la forma de un derecho y no de un tutelaje. Cualesquiera que sean sus dificultades, el individuo pretende siempre seguir siendo un ciudadano (Rosanvallón 1999).

En los proyectos de modernización del Estado, sin embargo, esta dimensión de la asistencialidad ha sido descuidada. La discusión sobre “el ciudadano” y su relación con el servicio público ha sido abordada más desde la eficiencia de la gestión y administración que desde la construcción solidaria del vínculo social. Numerosos estudios muestran que los usuarios aspiran a ser escuchados o satisfechos, y se irritan de las lentitudes y carencias administrativas. Frente a las expectativas del “usuario”, expresadas en términos de la consideración a sus derechos y un trato más amable, las respuestas del aparato público son percibidas como impersonales, poco pertinentes a sus necesidades y degradantes de su estatus de ciudadanía. A la racionalidad institucional se oponen las lógicas de los sujetos y “usuarios”, que tienen dificultad para comprender por qué las instituciones encargadas de ayudarlos los tratan como objetos (Marcel y Tohá 1995).

La crisis del Estado de bienestar y el proyecto modernizador vuelve a instalar la discusión y pone en cuestión el modelo de servicio público, su calidad, cantidad y gestión. Lo que deja entrever este diagnóstico y malestar de los “asistidos” es que el derecho a la inserción va más allá del derecho a la subsistencia. El derecho a la inserción social es también el derecho al reconocimiento del sentido de su quehacer en sociedad; el derecho a la consideración de los individuos como ciudadanos activos y no solamente como asistidos a los que hay que socorrer.

La noción de inserción social es, por cierto, puesta en cuestión al hacer evidente que lo que hoy reivindican los ciudadanos, hasta el más pobre de ellos, es la necesidad de articular inserción económica y comunidad de sentidos; o, en otros términos, integración y cohesión social. Lo que hoy se exige no es

solamente el derecho a vivir, sino *a vivir en sociedad*. La articulación y el equilibrio entre la integración y la cohesión social constituye uno de los principales desafíos de la sociedad y el Estado contemporáneo,

BIBLIOGRAFÍA

- Assies W., M. A. Calderón y T. Salman. 2000. "Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina". Doc. preparatorio para el XXIII Coloquio de Antropología e Historias Regionales, México.
- Bajoit, Guy. 2002. "La mutation de la politique sociale dans les Etats néo-libéraux". Ponencia Seminario Políticas Sociales, Universidad Católica de Valparaíso.
- Espinoza, Vicente. 1999. "Dinámica reticular de la pobreza". Ponencia Seminario Universidad General Sarmiento, Buenos Aires.
- Marcel, M. y C. Tohá. 1995. "Reforma del Estado y de la gestión pública". S/d.
- Oneto, Leonardo. 2002. "Los discursos sobre la pobreza en Chile: análisis de sus paradigmas". *Proposiciones* 34 (Santiago: Ediciones SUR).
- Rosanvallón, Pierre. 1999. *La nueva cuestión social: Repensar el Estado providencia*. Buenos Aires: Ed. Manantial
- Simmel, George. 2002. *Les pauvres*. France: PUF.